

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 23/005/2005 (público)

Servicio de Noticias: 218/2005

10 de agosto de 2005

<http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA230052005>

Camboya: La condena a un parlamentario indica que continúan existiendo defectos en el sistema judicial

Amnistía Internacional condena enérgicamente la pena de siete años de prisión impuesta a Cheam Channy por el Tribunal Militar el 9 de agosto, como otro indicador más de que en Camboya no se respetan ni se protegen los derechos humanos, ni se aplican las normas internacionales de imparcialidad procesal.

Cheam Channy, parlamentario del Partido de Sam Rainsy, de la oposición, fue detenido el 3 de febrero de 2005, inmediatamente después de que se le retirase la inmunidad parlamentaria. Fue acusado formalmente de “delincuencia organizada” y “fraude”, en virtud de las Disposiciones relativas al poder judicial y a la legislación y los procedimientos penales aplicables en Camboya durante el periodo de transición, de 1992 (Ley UNTAC), actualmente en vigor, así como de infringir la Ley de Partidos Políticos de 1997.

“Esta farsa de justicia es un claro intento de reprimir a la oposición política en Camboya y de reducir la libertad de expresión y de asociación. Cheam Channy debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional”, ha declarado Amnistía Internacional.

A pesar de que Cheam Channy es un civil acusado de delitos que carecen de naturaleza militar, fue encarcelado en una prisión militar y llevado ante el Tribunal Militar alrededor de cinco días después de que expirase el plazo de seis meses de prisión preventiva previsto en la legislación camboyana. No existe ninguna disposición legal en Camboya que permita que un tribunal militar juzgue a civiles. Amnistía Internacional ha transmitido en ocasiones anteriores a las autoridades su preocupación por el uso del Tribunal Militar para juzgar casos sobre los que carece de competencia.

Según informes sobre las actuaciones judiciales, no se presentó ninguna prueba creíble que justificase las acusaciones. También se vulneraron las normas internacionales básicas de imparcialidad procesal, como la ausencia de pruebas creíbles, y el hecho de que no se permitió que declarasen testigos de la defensa y de que el abogado defensor no pudo interrogar a todos los testigos de la acusación.

La detención de Cheam Channy guarda relación con las acusaciones formuladas en julio de 2004 en relación con las actividades del Comité número 14 del Partido de Sam Rainsy, del que era presidente, y la supuesta creación de una fuerza armada extremista o “ejército en la sombra”. No es la primera vez que quienes se oponen al gobierno han sido acusados de representar una amenaza militar, aparentemente sin fundamento.

El Partido de Sam Rainsy siempre ha actuado abiertamente en relación con el Comité número 14, que se creó para observar la actuación de los ministerios del gobierno que se ocupan de la defensa nacional, los asuntos relativos a veteranos, la desmovilización y la seguridad pública, siguiendo el modelo de “ministerios en la sombra” de partidos de la

oposición de todo el mundo. A tenor de la información de que dispone Amnistía Internacional, no hay pruebas creíbles que justifiquen las acusaciones formuladas contra Cheam Channy, que podría ser condenado a una larga pena de prisión por estar en la oposición y criticar al gobierno.

Khom Piseth, ex miembro del Partido de Sam Rainsy, fue condenado en ausencia a cinco años de prisión en el mismo juicio. Estaba acusado de estar implicado en el "ejército en la sombra" y huyó de Camboya en agosto de 2004. En mayo de 2005 recibió el estatuto de refugiado y se reestableció en un tercer país.

Otros dos parlamentarios del mismo partido, Sam Rainsy y Chea Poch, a quienes se les retiró la inmunidad parlamentaria al mismo tiempo que a Cheam Channy, salieron del país ante la posibilidad de ser detenidos. Amnistía Internacional siente preocupación por la posibilidad de que, si regresan a Camboya, sean también acusados de delitos por motivaciones políticas.

Información complementaria

La condena de Cheam Channy se produce justo una semana después de otro juicio emblemático, el celebrado por el homicidio del destacado sindicalista y activista de derechos humanos Chea Vichea en enero de 2004. Born Samnang y Sok Sam Oeun fueron condenados a sendas penas de 20 años de prisión después de una investigación empañada por defectos en todos los niveles del sistema judicial, y de un juicio en el que se incumplieron las normas internacionales de imparcialidad procesal. Según los informes, la policía torturó e intimidó a sospechosos y testigos y ha habido una injerencia política flagrante en las actuaciones judiciales. Amnistía Internacional siente una gran preocupación porque sigue habiendo graves defectos en el sistema judicial camboyano merced a los cuales, como ilustra este caso, personas inocentes pueden ser acusadas y encarceladas injustamente por delitos que no han cometido, mientras los verdaderos autores continúan gozando de impunidad.

Ahora que el poder judicial de Camboya vuelve a ser objeto de atención, Amnistía Internacional reitera su valoración de que el sistema judicial camboyano es tan débil y está sometido a tantas presiones políticas, especialmente en los casos más destacados, que no puede garantizar que las investigaciones y los juicios se realizan de forma que se respeten el derecho internacional y las normas de imparcialidad procesal.